

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

Especialización en Alto Gobierno

INNOVACIÓN SOCIAL Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE
RESIDUOS EN VEREDAS DEL SUR DE HISPANIA ANTIOQUIA

Modalidad: Monografía

Autor: Jairo Alonso Cifuentes Munera

director:

Ciudad: Medellin

Mes y Año

Agradecimientos

Hoy, al alcanzar esta meta y culminar mis estudios en Alto gobierno, mi primer y más profundo agradecimiento es para Dios, él ha sido mi guía constante, la fuente de mi sabiduría y el arquitecto de mis pasos. En los momentos de cansancio, Él fue quien renovó mis fuerzas; en los desafíos académicos, fue quien iluminó mi entendimiento; y en cada decisión, fue Su mano la que me impulsó a seguir adelante.

Gratitud inmensa a mi esposa e hijos, por su apoyo incondicional y constante motivación a lo largo de este proceso. Sin ustedes, no habría sido posible.

A la Universidad UNIMINUTO, mil y mil gracias, por brindarme la oportunidad de crecer académica y profesionalmente a través de este posgrado en Alto gobierno, ya que, por medio de este nuevo logro, espero mejorar mi calidad de vida y la de mi familia al mismo tiempo fortalecerme y crecer a nivel profesional y laboral.

Agradezco a la Universidad UNIMINUTO por la formación y el conocimiento adquirido, y a mi familia por ser mi fuente de inspiración y fortaleza.

Índice

INNOVACIÓN SOCIAL Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN VEREDAS DEL SUR DE HISPANIA ANTIOQUIA	1
Resumen	1
CAPÍTULO 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	2
Pregunta de investigación:	6
OBJETIVOS	6
Objetivo general	6
Objetivos específicos	6
Antecedentes	7
Nivel internacional	7
Innovación social como reconfiguración institucional	9
Gobernanza colaborativa y coproducción	9
Gestión del conocimiento y aprendizaje institucional	10
Nivel latinoamericano	10
En nuestro país	13
Nivel local	14
Vacío de conocimiento	16
CAPÍTULO 2. PERSPECTIVA TEÓRICA Y CONCEPTUAL	17
Innovación social y desarrollo territorial: potencial transformador y límites estructurales	18
Gestión del conocimiento: entre la tecnocracia y la ecología de saberes	20
Gobernanza colaborativa y bienes comunes	22
Gestión de residuos sólidos y enfoques ambientales contemporáneos	25
Enfoque epistemológico	27
Marco contextual e institucional	28
Perspectiva teórica y conceptual	29
Evaluación de la situación objeto de estudio	30
Opciones de abordaje y criterios de evaluación	31
CAPÍTULO 3. ENFOQUE Y DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN	31
ENFOQUE Y DISEÑO METODOLÓGICO	32
Enfoque de la investigación	32
Tipo y diseño de investigación	33
Fuentes de información y criterios de selección documental	34
Técnicas e instrumentos	34
Fases del proceso investigativo	35
Categorización y clasificación de la información	36
CAPÍTULO 4. RESULTADOS	37
Gestión institucional de los residuos sólidos en el ámbito rural	38
Prácticas comunitarias de manejo de residuos	39

Aprovechamiento y valorización de residuos	39
Participación comunitaria y gobernanza	40
Gestión del conocimiento e innovación social.....	41

TABLA 1 CORRESPONDENCIA ENTRE OBJETIVOS ESPECÍFICOS, RESULTADOS Y ANÁLISIS INTERPRETATIVO	41
--	-----------

TABLA 2 CORRESPONDENCIA ENTRE CATEGORÍAS DE RESULTADOS Y OBJETIVO GENERAL	42
Discusión analítica de los resultados en relación con los objetivos del estudio.....	43
Brecha institucional–territorial y reproducción de modelos urbanos.....	43
Orientación técnico-administrativa y ausencia de integración socio ecológica	44
Prácticas comunitarias como respuestas adaptativas	44
Potencial productivo de los residuos orgánicos y economía circular rural	45
Participación formal y gobernanza limitada	45
Desarticulación entre saber técnico y conocimiento local	46
Síntesis interpretativa	46

TABLA 3 SÍNTESIS INTEGRADORA: DE LOS HALLAZGOS A LAS ALTERNATIVAS	47
--	-----------

CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	47
Conclusiones.....	47
Recomendaciones	51
Referencias	52

INNOVACIÓN SOCIAL Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN VEREDAS DEL SUR DE HISPANIA ANTIOQUIA

Resumen

La presente monografía analiza de manera crítica la gestión integral de los residuos sólidos en las veredas del sur del municipio de Hispania, Antioquia, un contexto rural caracterizado por limitadas capacidades institucionales, dispersión territorial y una economía basada principalmente en actividades agropecuarias. El estudio parte de la identificación de una problemática persistente asociada a prácticas inadecuadas de disposición de residuos, tales como la quema, el enterramiento y el vertimiento en espacios naturales, las cuales evidencian una brecha significativa entre los lineamientos normativos del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) y las dinámicas reales del territorio rural.

La investigación se desarrolló desde un enfoque cualitativo de tipo descriptivo–analítico, bajo un diseño de estudio de caso evaluativo, sustentado en un posicionamiento epistemológico interpretativo–crítico. Para la recolección de información se emplea la técnica del análisis documental.

Los resultados evidencian que el modelo institucional vigente presenta una orientación predominantemente urbana, con baja adaptación a las particularidades rurales, lo que limita la cobertura del servicio de aseo, la participación comunitaria y el aprovechamiento de residuos, especialmente los orgánicos. No obstante, el estudio identifica oportunidades estratégicas para fortalecer la gestión de residuos mediante enfoques de innovación social, gestión del conocimiento y gobernanza colaborativa. En conclusión, se plantea la necesidad de avanzar hacia modelos territorializados y participativos que contribuyan al desarrollo rural sostenible y a la mejora de la gestión ambiental en contextos rurales.

Palabras clave

gestión integral de residuos sólidos; innovación social; gestión del conocimiento; gobernanza colaborativa; desarrollo rural sostenible.

Capítulo 1. Planteamiento del problema

La gestión integral de los residuos sólidos constituye uno de los desafíos estructurales más complejos para los territorios rurales en Colombia, especialmente en aquellos municipios de categoría sexta donde las capacidades institucionales, técnicas y financieras son limitadas. La literatura especializada coincide en que los contextos rurales enfrentan condiciones diferenciadas frente a la gestión de residuos, asociadas a la dispersión poblacional, la baja densidad habitacional, las dificultades de acceso vial y los altos costos de operación de los sistemas convencionales de recolección y disposición final (Banco Mundial, 2018; Wilson et al., 2015; Zurbrügg et al., 2012). En América Latina, estas limitaciones se ven agravadas por la histórica priorización de los centros urbanos en la formulación de políticas públicas, lo que ha generado brechas estructurales en la prestación de servicios básicos ambientales en zonas rurales (CEPAL, 2020; Scheinberg et al., 2010).

En este contexto, las veredas del sur del municipio de Hispania, Antioquia, evidencian una problemática persistente asociada a la disposición inadecuada de residuos sólidos, manifestada en prácticas como la quema a cielo abierto, el enterramiento informal y el vertimiento en fuentes hídricas y espacios naturales. Estas prácticas han sido ampliamente documentadas en comunidades rurales de países en desarrollo como respuestas adaptativas ante la ausencia o deficiencia de sistemas formales de gestión de residuos (OPS, 2017; Zurbrügg, 2003). De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la quema y el manejo inadecuado de residuos en áreas rurales representa riesgos significativos para la salud humana y los ecosistemas, especialmente por la contaminación del aire, del suelo y del agua (OMS, 2016). Estas prácticas, lejos de ser decisiones aisladas, responden a una combinación de factores estructurales que incluyen la ausencia de cobertura efectiva del servicio público de aseo en zonas rurales dispersas, la débil apropiación comunitaria de los lineamientos del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) y la limitada adaptación de las políticas públicas a las dinámicas socioculturales del territorio. Evaluaciones de la política pública de residuos sólidos en Colombia han evidenciado que, si bien existe un marco normativo robusto, su

implementación en zonas rurales presenta rezagos significativos debido a falencias en gobernanza, seguimiento y participación comunitaria (Contraloría General de la República, 2018; DNP, 2019).

Aunque el municipio de Hispania cuenta formalmente con un PGIRS vigente, su diseño e implementación han estado históricamente orientados a las dinámicas urbanas, reproduciendo un enfoque centralizado que desconoce las particularidades productivas, culturales y organizativas del sector rural. Este fenómeno ha sido señalado por diversos autores como una limitación recurrente de los instrumentos de planificación ambiental, los cuales tienden a replicar modelos urbanos estandarizados que resultan poco funcionales en contextos rurales y campesinos (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2016; CEPAL, 2020; Guerrero et al., 2013). Esta situación genera una brecha significativa entre la normativa existente y las prácticas reales de manejo de residuos en las veredas, lo cual pone en evidencia una problemática de gobernanza ambiental más profunda. Desde la perspectiva de la gobernanza de los bienes comunes, esta brecha se relaciona con la falta de articulación entre el conocimiento técnico-institucional y los saberes locales de las comunidades campesinas, aspecto fundamental para la sostenibilidad de las políticas ambientales territoriales (Ostrom, 2011; Berkes, 2009).

Adicionalmente, la economía rural del sur de Hispania, caracterizada principalmente por la caficultura y otras actividades agropecuarias, produce volúmenes considerables de residuos orgánicos y subproductos agrícolas que no son gestionados bajo esquemas de aprovechamiento o economía circular. Estudios de la FAO indican que los residuos orgánicos representan entre el 50 % y el 70 % de los residuos generados en zonas rurales, y que su manejo inadecuado contribuye a la degradación ambiental y a la pérdida de oportunidades productivas (FAO, 2013; FAO, 2019). En territorios con economías agrícolas, estos residuos incluyen restos de cosecha, pulpa de café, estiércoles y residuos domésticos biodegradables, los cuales poseen un alto potencial para procesos de compostaje, biofertilización y producción de energía a pequeña escala (Hoornweg & Bhada-Tata, 2012; Zurbrügg et al., 2012).

Esta condición representa, simultáneamente, un problema ambiental y una oportunidad desaprovechada para la generación de valor social y económico, dado que el aprovechamiento de residuos orgánicos puede fortalecer sistemas productivos locales, mejorar la fertilidad de los suelos y reducir la dependencia de insumos externos. Sin embargo, la inexistencia de modelos adaptados de aprovechamiento, sumada a la informalidad del reciclaje y a la falta de reconocimiento de los recicladores de oficio rurales, profundiza las inequidades sociales y limita el potencial transformador de la gestión de residuos como motor de desarrollo local. Investigaciones sobre reciclaje inclusivo han demostrado que la exclusión de recicladores en zonas rurales reproduce dinámicas de pobreza y precariedad laboral, invisibilizando su rol ambiental y social (Medina, 2010; Días, 2016; Wilson et al., 2015).

Desde una perspectiva analítica, la problemática no puede reducirse a un déficit de infraestructura o a una falta de educación ambiental entendida de manera instrumental. En consonancia con los enfoques contemporáneos de sostenibilidad y desarrollo territorial, se trata de una situación compleja que exige ser abordada desde enfoques integrales que incorporen la innovación social, la gestión del conocimiento y la participación comunitaria como ejes estructurantes (Moulaert et al., 2013; Howaldt & Schwarz, 2010). La innovación social, entendida como la creación de nuevas formas de organización, gobernanza y acción colectiva orientadas a la generación de valor social, permite replantear la gestión de residuos más allá de su dimensión técnica, situándola como un proceso de transformación territorial y fortalecimiento del tejido social rural.

A su vez, la gestión del conocimiento posibilita la articulación entre saberes científicos, normativos y empíricos, facilitando la construcción de soluciones contextualizadas y sostenibles. Autores como Nonaka y Takeuchi (1995) y Berkes (2009) destacan que la integración entre conocimiento formal y conocimiento local resulta clave para enfrentar problemáticas socioambientales complejas, especialmente en territorios rurales con fuerte arraigo cultural y prácticas productivas tradicionales. En este sentido, la participación de las comunidades campesinas no solo mejora la efectividad de las intervenciones, sino que

contribuye a la apropiación social de las políticas públicas y a su sostenibilidad en el tiempo (Pretty, 1995; FAO, 2019).

En este sentido, el problema de investigación se sitúa en la necesidad de evaluar críticamente el estado actual de la gestión de residuos sólidos en las veredas del sur de Hispania, identificando las limitaciones del modelo institucional vigente y explorando alternativas basadas en la innovación social y la gestión del conocimiento que permitan fortalecer la sostenibilidad ambiental, social y económica del territorio. Este enfoque resulta coherente con las recomendaciones metodológicas para el análisis de políticas públicas ambientales en contextos rurales, las cuales enfatizan la importancia de la revisión de literatura especializada, el análisis documental de instrumentos normativos y la sistematización de experiencias previas en territorios rurales comparables como base para la formulación de soluciones contextualizadas y viables (CEPAL, 2020; DNP, 2019; Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2016).

En consecuencia, la situación descrita pone de manifiesto que la gestión de los residuos sólidos en las veredas del sur del municipio de Hispania no responde únicamente a problemáticas operativas o normativas aisladas, sino que se configura como una expresión de dinámicas estructurales más amplias vinculadas a la insuficiente prestación del servicio público de aseo en zonas rurales, a la limitada incorporación de prácticas de separación en la fuente y aprovechamiento de residuos, y a la débil articulación entre las políticas públicas, las capacidades institucionales y las realidades socioeconómicas del territorio. Estas condiciones inciden directamente en la persistencia de prácticas de disposición inadecuada de residuos, tales como la quema, el enterramiento informal y el vertimiento en espacios naturales, con impactos ambientales, sociales y sanitarios acumulativos.

Asimismo, la revisión analítica realizada permite identificar que las alternativas orientadas hacia una gestión más sostenible de los residuos sólidos en contextos rurales se encuentran condicionadas por un conjunto de barreras interrelacionadas. Entre ellas se destacan las limitaciones institucionales asociadas a la planeación y ejecución de los instrumentos de gestión ambiental; las barreras técnicas derivadas de la falta de infraestructura

adecuada, tecnologías apropiadas y modelos de aprovechamiento adaptados al contexto rural; y las barreras socioeconómicas vinculadas a las condiciones de vida de la población campesina, la informalidad del reciclaje y la escasa valorización social y económica de los residuos como recurso. La comprensión integral de estas barreras resulta fundamental para la formulación de estrategias contextualizadas que permitan avanzar hacia esquemas de gestión de residuos más inclusivos, participativos y sostenibles.

Pregunta de investigación:

¿De qué manera la insuficiente prestación del servicio público de aseo y la falta de prácticas de separación y aprovechamiento de residuos en las veredas del municipio de Hispania influyen en la disposición inadecuada de residuos sólidos, y cuáles son las barreras institucionales, técnicas y socioeconómicas que limitan la implementación de soluciones sostenibles en el territorio?

Objetivos

Objetivo general

Identificar brechas, oportunidades y alternativas de fortalecimiento sobre la gestión integral de residuos sólidos en las veredas del sur del municipio de Hispania, Antioquia, a partir de un enfoque de innovación social y gestión del conocimiento.

Objetivos específicos

Los objetivos específicos son los siguientes:

Conceptualizar la gestión de residuos sólidos en el marco de la innovación y gestión del conocimiento.

Analizar el contexto institucional, normativo y territorial que enmarca la gestión de residuos sólidos en las veredas del sur de Hispania.

Analizar experiencias documentadas de innovación social aplicables al contexto rural.

Proponer las oportunidades para el municipio de la Hispania – Antioquia.

Antecedentes

Nivel internacional

La gestión de residuos sólidos en contextos rurales ha sido abordada a nivel internacional desde enfoques ambientales, socio institucionales y de gobernanza territorial. La literatura coincide en que la ruralidad no constituye una simple variación cuantitativa del entorno urbano, sino una configuración territorial con dinámicas demográficas, económicas e institucionales diferenciadas que requieren diseños de política pública específicos.

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA, 2015), en el Global Waste Management Outlook, no solo advierte la ineficiencia de modelos centralizados en territorios de baja densidad, sino que introduce una dimensión estructural clave: la sostenibilidad del sistema depende de su alineación con la estructura productiva local. En áreas rurales, donde predominan actividades agrícolas y economías primarias, la fracción orgánica de residuos es significativamente mayor, lo que abre la posibilidad de circuitos locales de valorización biológica. El PNUMA enfatiza que la descentralización funcional —como el compostaje comunitario o biodigestores rurales— puede reducir costos logísticos, emisiones de gases de efecto invernadero y presión sobre rellenos sanitarios regionales.

El Banco Mundial, en el estudio de Kaza et al. (2018), complementa este diagnóstico introduciendo un análisis comparado global que demuestra que los municipios rurales enfrentan una doble restricción: limitada base tributaria y altos costos per cápita de recolección. El informe propone esquemas de cooperación intermunicipal, asociaciones público-comunitarias y mecanismos de financiamiento cruzado como alternativas viables. Su

aporte central radica en vincular gestión de residuos con sostenibilidad fiscal y transición climática, incorporando el debate en la agenda de desarrollo sostenible.

Por su parte, la OCDE (2020) avanza hacia una perspectiva de economía circular territorializada, señalando que la circularidad no puede implementarse uniformemente sin considerar capacidades institucionales locales. La organización introduce el concepto de “ecosistemas circulares regionales”, donde municipios rurales pueden desempeñar un papel estratégico en cadenas de bioeconomía, producción de compost, biomateriales y energía renovable. Este enfoque amplía el debate desde la gestión de residuos hacia el desarrollo territorial sostenible.

Desde la literatura académica, Wilson et al. (2015) desarrollan un marco comparativo internacional que identifica seis elementos críticos de desempeño en sistemas de residuos: gobernanza, sostenibilidad financiera, inclusión social, control ambiental, infraestructura y participación ciudadana. Este modelo resulta particularmente relevante para contextos rurales, ya que permite evaluar no solo eficiencia técnica, sino legitimidad institucional y cohesión social.

Marshall y Farahbakhsh (2013) introducen una crítica estructural a la transferencia de modelos tecnocráticos, argumentando que la sostenibilidad depende de la adaptación contextual y de la construcción de capacidades locales. Su investigación demuestra que los proyectos impulsados externamente, sin apropiación comunitaria, presentan altas tasas de abandono.

En contraste, Zurbrügg et al. (2012) proponen enfoques participativos que incorporan análisis socioeconómico previo al diseño técnico, destacando la importancia de mapear actores, incentivos y dinámicas informales. Guerrero et al. (2013), mediante revisión sistemática, identifican que los factores críticos de éxito en países en desarrollo incluyen liderazgo político local, claridad regulatoria, financiamiento estable y educación ambiental continua. Este hallazgo conecta directamente con la dimensión de gobernanza y aprendizaje institucional.

En síntesis, la literatura internacional no solo cuestiona la homogeneización de modelos urbanos, sino que redefine la sostenibilidad rural como un fenómeno multidimensional que integra infraestructura, gobernanza, inclusión y resiliencia territorial.

Innovación social como reconfiguración institucional

Moulaert et al. (2013) conceptualizan la innovación social como un proceso orientado a la satisfacción de necesidades humanas no cubiertas, la reconfiguración de relaciones sociales y la transformación de marcos institucionales. En gestión de residuos rurales, esto implica reconocer que la solución no reside únicamente en tecnología, sino en la capacidad de reorganizar redes comunitarias y redistribuir responsabilidades.

Howaldt y Schwarz (2010) agregan que la innovación social emerge en contextos donde el mercado y el Estado presentan fallas estructurales. En territorios rurales, estas fallas se manifiestan en baja cobertura, escasa rentabilidad del servicio y limitada presencia institucional. Por ello, las soluciones comunitarias —como cooperativas de reciclaje o bancos de residuos orgánicos— constituyen innovaciones que reconfiguran la gobernanza local.

Un aporte fundamental de estos autores es la distinción entre innovación incremental y transformativa. En el ámbito rural, las iniciativas de gestión de residuos pueden escalar desde soluciones operativas (mejoras en recolección) hasta transformaciones estructurales que redefinan el rol del municipio y la comunidad en la coproducción del servicio.

Gobernanza colaborativa y coproducción

Ansell y Gash (2008) desarrollan un modelo procesual donde la colaboración se construye a partir de condiciones iniciales (confianza previa, distribución de poder), diseño institucional (reglas claras) y liderazgo facilitador. Este marco es particularmente útil para analizar municipios rurales donde existen relaciones históricas entre autoridades locales y comunidades campesinas.

Emerson et al. (2012) amplían este enfoque proponiendo un sistema integrado de gobernanza colaborativa compuesto por tres dinámicas: motivación compartida, capacidad

conjunta y acción colaborativa. En gestión de residuos rurales, esto se traduce en la necesidad de articular voluntad política, capacidades técnicas y participación comunitaria sostenida.

La literatura demuestra que sin institucionalización formal —acuerdos, normativas locales, inclusión en planes de desarrollo— la colaboración tiende a depender de liderazgos individuales y pierde sostenibilidad en el tiempo.

Gestión del conocimiento y aprendizaje institucional

Nonaka y Takeuchi (1995) introducen el modelo SECI, que resulta particularmente pertinente para contextos rurales donde el conocimiento tácito —saberes campesinos sobre compostaje, manejo orgánico o reutilización— puede convertirse en conocimiento explícito mediante procesos de sistematización y capacitación.

Choo (2006) sostiene que las organizaciones públicas que aprenden son aquellas capaces de transformar información en acción estratégica. En municipios rurales, esto implica documentar experiencias, evaluar resultados y ajustar políticas de manera adaptativa.

Berkes (2012) aporta el concepto de sistemas socio ecológicos, destacando que la resiliencia depende de la integración entre conocimiento tradicional y ciencia formal. En gestión de residuos rurales, esta integración puede mejorar la aceptación de tecnologías apropiadas.

Reed et al. (2010) profundizan en el aprendizaje social como proceso deliberativo que fortalece legitimidad y cohesión comunitaria. Su aporte es clave porque vincula participación con mejora de resultados ambientales, superando la visión instrumental de la consulta pública.

Nivel latinoamericano

En América Latina, la gestión de residuos sólidos en contextos rurales se encuentra atravesada por desigualdades estructurales históricas vinculadas a descentralización incompleta, debilidad fiscal municipal y fragmentación territorial. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2017) no solo documenta brechas en cobertura y disposición final adecuada, sino que introduce el concepto de **heterogeneidad estructural territorial**, señalando que las

capacidades administrativas, fiscales y técnicas varían drásticamente entre municipios urbanos y rurales. En su informe posterior sobre economía circular, CEPAL (2020) enfatiza que la transición hacia modelos circulares requiere marcos multinivel de gobernanza que integren políticas ambientales, productivas y sociales, advirtiendo que los municipios rurales suelen quedar al margen de estas agendas por limitaciones institucionales.

La Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (AIDIS, 2019) complementa este diagnóstico desde una perspectiva técnica, evidenciando que en zonas rurales persisten prácticas como quema abierta, enterramiento doméstico y vertimientos informales debido a ausencia de infraestructura adaptada. Sin embargo, AIDIS también destaca que la tecnología apropiada de pequeña escala —como estaciones de transferencia simplificadas o plantas de compostaje modular— puede resultar más eficiente que soluciones metropolitanas trasladadas sin adaptación.

Desde una perspectiva socioeconómica, Medina (2007) aporta un análisis histórico de los recicladores en América Latina, mostrando que, aunque su rol ha sido central en la recuperación de materiales, han sido sistemáticamente excluidos de la planificación formal. Su investigación permite comprender que la informalidad en la gestión de residuos no es simplemente un problema técnico, sino una manifestación de desigualdad estructural.

En esta misma línea, Gutberlet (2015) introduce el concepto de **“minería urbana solidaria”**, destacando que las cooperativas de recicladores pueden constituirse en actores de desarrollo territorial cuando existen marcos institucionales de apoyo. Su aporte es relevante para contextos rurales donde la economía solidaria puede convertirse en mecanismo de inclusión productiva y sostenibilidad ambiental simultáneamente.

No obstante, Schamber y Suárez (2018), a partir de estudios empíricos en Argentina, advierten que los procesos de formalización impulsados sin participación efectiva pueden generar nuevas jerarquías y exclusiones. Este hallazgo revela una tensión entre racionalidad administrativa estatal y dinámicas sociales locales, particularmente en territorios rurales donde las redes comunitarias son fundamentales para la sostenibilidad.

En el ámbito de innovación social rural, Rodríguez Herrera y Alvarado (2008) sistematizan experiencias latinoamericanas apoyadas por organismos multilaterales, mostrando que la valorización de residuos orgánicos puede fortalecer capital social, generar ingresos complementarios y promover gobernanza territorial. Sin embargo, también señalan que muchas iniciativas dependen de cooperación internacional, lo que limita su sostenibilidad financiera en el mediano plazo.

Sabatini y Vergara (2016) profundizan en el vínculo entre economía circular local y cohesión territorial, evidenciando que las prácticas comunitarias de compostaje y reutilización pueden convertirse en mecanismos de resiliencia económica rural. No obstante, advierten que la ausencia de articulación con políticas públicas estructurales impide su escalamiento.

Desde la perspectiva de gobernanza colaborativa, Ansell y Gash (2008) y Emerson et al. (2012) ofrecen marcos teóricos aplicables al contexto latinoamericano, donde la fragmentación institucional y la desigual distribución de poder dificultan la colaboración sostenida. Fernández y García (2019) muestran que en América Latina las experiencias de cogestión de residuos suelen mantenerse en fase piloto debido a cambios políticos locales, escasa institucionalización normativa y debilidad en financiamiento continuo.

De manera transversal, se evidencia tres problemáticas estructurales:

- La desigualdad fiscal y administrativa entre municipios.
- La alta dependencia de cooperación externa para innovación.
- La débil institucionalización de experiencias exitosas.

Así, el debate regional no solo gira en torno a cobertura, sino a la construcción de capacidades estatales locales, inclusión social y sostenibilidad institucional de largo plazo.

En nuestro país

En Colombia, la gestión de residuos sólidos en contextos rurales se enmarca en la Ley 142 de 1994, el Decreto 2981 de 2013 y el CONPES 3874 de 2016, que establecen principios de gestión integral y aprovechamiento. Sin embargo, estos instrumentos fueron diseñados bajo supuestos de economías de escala urbanas, lo que genera tensiones cuando se aplican en municipios rurales dispersos.

La Defensoría del Pueblo (2020) ha advertido que la cobertura en zonas rurales es significativamente inferior a la urbana, señalando que la falta de enfoque diferencial rural profundiza brechas ambientales y sanitarias. La Contraloría General de la República (2019) identifica además debilidades en seguimiento a PGIRS, insuficiencia de recursos y baja sostenibilidad financiera de los esquemas rurales.

Desde el ámbito académico, Schumacher (1973) sostiene que los modelos rurales deben incorporar esquemas de autogestión comunitaria y tecnologías apropiadas de bajo costo, adaptadas a condiciones territoriales específicas. Su aporte radica en señalar que la sostenibilidad rural depende más de la articulación social que de la infraestructura sofisticada.

Torres Hernández, A. M. (2025) enfatiza que la gestión rural requiere fortalecimiento de capacidades institucionales locales, particularmente en planeación, educación ambiental y seguimiento técnico. Identifican que la alta rotación administrativa en municipios de sexta categoría limita continuidad de políticas.

David Alves, Iría Villar & Salustiano Mato (2024) documentan experiencias de compostaje comunitario en municipios intermedios, mostrando que la valorización de residuos orgánicos puede reducir costos de transporte y fortalecer participación ciudadana. Gómez-Maldonado, A., Ospina-Espita, L. C., Rodríguez-Lesmes, P., & Rodríguez-Rodríguez, M. A. (2023) demuestran que la formalización asociativa de recicladores en contextos rurales genera impactos ambientales positivos cuando existe acompañamiento técnico continuo.

No obstante, Gerardo Bernache-Pérez, Lorena De Medina-Salas, Eduardo Castillo-González & Mario Rafael Giraldi-Díaz (2023) advierten que muchas iniciativas innovadoras no se integran formalmente en los PGIRS ni en planes de desarrollo municipal, lo que impide su escalabilidad. Ndiege & Wamuyu (2023) identifican además una débil cultura de sistematización y gestión del conocimiento, lo que dificulta transferencia de buenas prácticas entre municipios rurales.

Adicionalmente, estudios sobre descentralización fiscal en Colombia han evidenciado que los municipios rurales dependen en gran medida de transferencias nacionales, lo que limita su autonomía para invertir en infraestructura ambiental. Esta restricción estructural condiciona la implementación efectiva de modelos diferenciados.

En conclusión, el caso colombiano nos refleja una tensión entre el marco normativo nacional estandarizado, la capacidad fiscal y técnica limitada en municipios rurales, las innovaciones comunitarias con baja institucionalización y la débil integración entre aprendizaje local y política pública.

Nivel local

A nivel local, los diagnósticos municipales, los PGIRS y los estudios universitarios regionales coinciden en señalar que la gestión de residuos sólidos en zonas rurales se caracteriza por soluciones fragmentadas, baja articulación interinstitucional y una participación comunitaria limitada a etapas operativas más que decisorias. Aunque existen iniciativas comunitarias innovadoras, estas suelen depender del voluntarismo y carecen de mecanismos formales de reconocimiento y fortalecimiento por parte de la institucionalidad local.

En el caso de Medellín, los corregimientos rurales como Santa Elena, San Cristóbal, Alta vista, San Sebastián de Palmitas y San Antonio de Prado enfrentan desafíos diferenciados frente al casco urbano. La dispersión geográfica, las dificultades de acceso vial y los costos operativos del servicio de recolección generan esquemas menos eficientes y, en algunos sectores, prácticas informales de disposición final. Si bien el municipio cuenta con una empresa operadora consolidada como Empresas Públicas de Medellín (EPM), cuya filial presta el servicio de aseo, la

cobertura y la frecuencia en zonas rurales no siempre responden a las particularidades territoriales ni a las dinámicas productivas campesinas.

A nivel departamental, en Antioquia se evidencian brechas aún más marcadas entre municipios con mayor capacidad técnica y fiscal —como los del Valle de Aburrá— y aquellos de categorías quinta y sexta, donde la gestión de residuos depende en gran medida de transferencias nacionales y de esquemas asociativos intermunicipales que no siempre logran consolidarse. En varios municipios rurales persisten rellenos sanitarios con vida útil limitada, estaciones de transferencia precarias o incluso prácticas de disposición inadecuada, lo que refleja debilidades estructurales en planificación y control ambiental.

Además, aunque los PGIRS municipales incorporan lineamientos sobre aprovechamiento y economía circular, su implementación en áreas rurales enfrenta obstáculos como la escasa formalización de recicladores rurales, el limitado acceso a infraestructura para separación en la fuente, la débil articulación entre secretarías de ambiente, desarrollo rural y planeación y el insuficiente acompañamiento técnico continuo a organizaciones comunitarias.

En este contexto, las iniciativas comunitarias —como compostaje local, reciclaje asociativo o educación ambiental en veredas— constituyen expresiones relevantes de innovación social. Sin embargo, la ausencia de esquemas estables de financiamiento, incentivos económicos y reconocimiento normativo impide que estas experiencias trasciendan el ámbito experimental y se consoliden como política pública rural estructural.

La literatura local refuerza los planteamientos internacionales y nacionales sobre la necesidad de enfoques colaborativos y territorialmente contextualizados, pero también evidencia vacíos persistentes en la articulación entre innovación social, gobernanza colaborativa y gestión del conocimiento como un sistema integrado. En particular, se observa una débil sistematización de experiencias locales y una escasa incorporación de los aprendizajes comunitarios en la formulación de políticas municipales.

En Medellín y en varios municipios antioqueños, los procesos participativos tienden a concentrarse en la fase diagnóstica o pedagógica, sin garantizar una incidencia real en la toma

de decisiones presupuestales o en el rediseño de los modelos operativos del servicio. Esto revela una tensión entre participación formal y gobernanza efectiva, donde la comunidad es consultada pero no necesariamente integrada como actor estratégico del sistema.

Asimismo, persiste una fragmentación institucional que dificulta la construcción de un modelo integral de gestión rural de residuos: mientras las autoridades ambientales enfatizan el cumplimiento normativo, las dependencias de desarrollo rural priorizan productividad agropecuaria y las empresas prestadoras se enfocan en eficiencia operativa, sin un espacio consolidado de coordinación intersectorial permanente.

En consecuencia, el escenario local muestra que, aunque existen avances normativos y capacidades institucionales relativamente superiores en comparación con otros territorios del país, todavía no se consolida un enfoque sistémico que integre conocimiento técnico-administrativo, saberes comunitarios rurales, innovación social territorial, instrumentos financieros sostenibles y gobernanza colaborativa con poder decisorio real.

Esta brecha entre formulación normativa y apropiación territorial efectiva confirma que la gestión de residuos sólidos rurales en Medellín y Antioquia no es únicamente un problema operativo, sino un desafío estructural de gobernanza multinivel, articulación institucional y reconocimiento del territorio como espacio diferenciado dentro de la política pública municipal.

Vacío de conocimiento

El análisis de los antecedentes permite identificar un vacío de conocimiento relacionado con la integración efectiva de la innovación social, la gobernanza colaborativa y la gestión del conocimiento en la gestión de residuos sólidos en contextos rurales, especialmente en municipios rurales de pequeña escala. Si bien la literatura reconoce la relevancia de estos enfoques de manera individual, son limitados los estudios que analizan su interacción y su traducción en arreglos institucionales sostenibles que articulen actores comunitarios, estatales y técnicos. En este sentido, el presente estudio se propone aportar evidencia empírica y analítica que contribuya a cerrar esta brecha, fortaleciendo la comprensión de modelos de gestión de

residuos rurales basados en aprendizaje colectivo, participación y gobernanza colaborativa en el contexto específico del caso de estudio.

CAPÍTULO 2. Perspectiva teórica y conceptual

La gestión de residuos sólidos en contextos rurales no puede abordarse exclusivamente desde una lógica operativa. Se trata de una problemática estructural que expresa tensiones entre modelo de desarrollo, institucionalidad pública y racionalidades territoriales. En este sentido, **Enrique Leff** (2004, 2014) plantea que la crisis ambiental contemporánea es resultado de una racionalidad económica moderna que separa naturaleza y cultura, convirtiendo el territorio en objeto de explotación y no en espacio de significación social.

El aporte central de Leff no es solo denunciar la degradación ambiental, sino proponer la categoría de *racionalidad ambiental* como alternativa epistemológica y política. Esta racionalidad implica reconocer la diversidad cultural como fundamento de sostenibilidad, reintegrar conocimiento ecológico y prácticas productivas y reconfigurar el poder sobre el territorio.

Aplicado a la gestión de residuos rurales, este enfoque obliga a superar el paradigma lineal “recolección–transporte–disposición” y situar el análisis en la relación entre cultura productiva campesina, institucionalidad municipal y modelo económico regional.

Esta postura crítica dialoga y tensiona con la teoría de la modernización ecológica de **Arthur P J Mol** (2001), quien sostiene que la crisis ambiental puede enfrentarse mediante innovación tecnológica, reformas institucionales y mecanismos de mercado. Mientras Mol confía en la capacidad del sistema para reformarse internamente, Leff cuestiona las bases epistemológicas del mismo sistema. En contextos rurales como Hispania, esta tensión se traduce en un dilema práctico: ¿basta con optimizar la logística del servicio de aseo o se requiere transformar patrones culturales y productivos?

Innovación social y desarrollo territorial: potencial transformador y límites estructurales

El concepto de innovación social ha adquirido relevancia en el análisis de problemáticas públicas complejas. Geoff Mulgan, junto con Julie Caulier-Grice y Robin Murray (2010), define la innovación social como el desarrollo de nuevas ideas, servicios o modelos que satisfacen necesidades sociales de manera más eficaz y, simultáneamente, fortalecen las relaciones sociales. Esta definición resalta su doble dimensión: instrumental por (resolver problemas) y relacional por (transformar vínculos sociales).

En su obra, los autores enfatizan que la innovación social no se limita a la creatividad aislada, sino que implica procesos sistemáticos que incluyen identificación de necesidades, co-creación con actores sociales, prototipado, escalamiento y difusión. Además, subrayan que estas innovaciones suelen emerger en contextos de fallas del mercado y del Estado, donde comunidades, organizaciones civiles o alianzas híbridas experimentan soluciones adaptadas a su entorno. Así, la innovación social no solo introduce nuevos servicios, sino que modifica patrones de gobernanza, fomenta la participación ciudadana y genera capital social, contribuyendo a una transformación estructural progresiva.

Desde el enfoque territorial, Frank Moulaert et al. (2013) sostienen que la innovación social puede reconfigurar relaciones de poder en territorios periféricos, promoviendo inclusión social y cohesión territorial. Para estos autores, la innovación social está estrechamente vinculada con la justicia espacial y con procesos de empoderamiento colectivo que desafían dinámicas de exclusión socioeconómica. Moulaert argumenta que la dimensión territorial no es simplemente un escenario físico, sino un espacio de construcción política donde actores locales disputan recursos, significados y decisiones.

En zonas rurales, esto se traduce en asociaciones comunitarias de reciclaje, esquemas locales de compostaje o redes de educación ambiental basadas en capital social. Estas experiencias fortalecen la gobernanza local al articular saberes tradicionales con conocimientos técnicos, generando soluciones contextualizadas. Sin embargo, Moulaert advierte que su

sostenibilidad depende de condiciones estructurales como acceso a financiamiento, respaldo institucional y marcos normativos favorables.

No obstante, esta visión es matizada por perspectivas críticas. Arturo Escobar (2014) advierte que muchas experiencias locales quedan subsumidas bajo marcos institucionales globales que reproducen dependencias estructurales. Desde su enfoque post desarrollista, Escobar plantea que el desarrollo, incluso en su versión “participativa” o “innovadora”, puede convertirse en un dispositivo que homogeneiza culturas y subordina racionalidades locales a lógicas capitalistas globales. Para él, el verdadero potencial transformador radica en la construcción de alternativas al desarrollo, basadas en ontologías relacionales y en la autonomía territorial de comunidades.

En línea similar, Wolfgang Sachs (1992) cuestiona el discurso del desarrollo por invisibilizar racionalidades locales y naturalizar un modelo occidental de progreso. En su crítica, Sachs sostiene que conceptos como crecimiento, modernización y productividad se han universalizado como parámetros incuestionables, desplazando otras formas de concebir el bienestar. Desde esta óptica, algunas iniciativas de innovación social podrían terminar instrumentalizadas dentro del mismo paradigma desarrollista que dicen transformar.

Asimismo, Sergio Boisier (2004) plantea que el desarrollo territorial requiere articulación multinivel y capacidad institucional. Boisier sostiene que el territorio no se desarrolla únicamente por acumulación de proyectos, sino por la existencia de un “proyecto colectivo” respaldado por instituciones sólidas, liderazgo local y coordinación entre niveles de gobierno. Sin esta articulación, las iniciativas comunitarias tienden a debilitarse o fragmentarse, especialmente en contextos donde la descentralización no ha sido acompañada de recursos suficientes ni de fortalecimiento administrativo.

En Colombia, los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) buscan integrar dimensiones técnicas y sociales, promoviendo inclusión de recicladores, educación ambiental y sostenibilidad financiera. Sin embargo, en municipios rurales persisten brechas entre diseño normativo e implementación real, lo que confirma que la innovación social no sustituye al

Estado, sino que debe complementarlo. La debilidad fiscal, la limitada capacidad técnica y la fragmentación institucional dificultan que las iniciativas comunitarias escalen y se consoliden.

En síntesis, la innovación social posee un potencial transformador significativo en el desarrollo territorial, especialmente cuando fortalece capital social, empodera actores locales y reconfigura relaciones de poder. No obstante, sus límites estructurales —dependencias globales, debilidad institucional y marcos normativos insuficientes— evidencian que su eficacia depende de una articulación estratégica entre comunidad, Estado y mercado. Así, más que una alternativa aislada, la innovación social se configura como un componente complementario dentro de procesos integrales de desarrollo territorial.

Gestión del conocimiento: entre la tecnocracia y la ecología de saberes

La gestión del conocimiento resulta central para comprender cómo las comunidades rurales producen, organizan y transmiten saberes ambientales. Ikujiro Nonaka y Hirotaka Takeuchi (1995) proponen el modelo SECI (Socialización, Externalización, Combinación e Internalización), según el cual el conocimiento emerge de la interacción dinámica entre dimensiones tácitas y explícitas. Para estos autores, el conocimiento no es un recurso estático, sino un proceso continuo de creación colectiva que ocurre en contextos organizacionales y sociales específicos.

En el modelo SECI, la socialización permite compartir experiencias y generar conocimiento tácito mediante la interacción directa; la externalización traduce ese conocimiento en conceptos explícitos; la combinación articula distintos saberes sistematizados; y la internalización reincorpora lo aprendido en prácticas cotidianas. Aplicado a contextos rurales, este modelo permite comprender cómo prácticas ambientales como lo es el compostaje tradicional o el manejo comunitario de residuos, se transmiten intergeneracionalmente y pueden fortalecerse cuando se articulan con procesos formativos formales sin perder su base experiencial.

Este enfoque dialoga con la noción de conocimiento tácito desarrollada por Michael Polanyi (1966), quien afirma que “sabemos más de lo que podemos expresar”. Polanyi sostiene que todo conocimiento explícito se apoya en una dimensión tácita previa, ligada a habilidades, intuiciones y experiencias corporizadas. En contextos rurales, este saber tácito se manifiesta en prácticas tradicionales de reutilización, compostaje o manejo agroecológico, que no siempre están formalizadas en manuales técnicos, pero que constituyen sistemas complejos de comprensión ecológica contruidos históricamente.

Reconocer este componente tácito implica evitar enfoques tecnocráticos que deslegitimen conocimientos locales por no ajustarse a estándares científicos formales. Por el contrario, la gestión del conocimiento en territorios rurales requiere metodologías participativas que permitan traducir y valorar estos saberes sin despojarlos de su contexto cultural.

Desde una postura crítica, Boaventura de Sousa Santos (2010) propone una “ecología de saberes” que cuestiona la supremacía del conocimiento científico moderno y reivindica la coexistencia de múltiples racionalidades. El problema no radica en la ciencia, sino en su pretensión de exclusividad epistemológica. La ecología de saberes plantea un diálogo horizontal entre conocimientos científicos, populares, ancestrales y comunitarios, reconociendo su carácter incompleto pero complementario.

Esto resulta fundamental para evitar intervenciones verticales en educación ambiental, donde expertos externos imponen soluciones sin considerar dinámicas locales. En el ámbito de la gestión de residuos, por ejemplo, integrar conocimientos técnicos con prácticas campesinas puede generar modelos más sostenibles y culturalmente apropiados, fortaleciendo la apropiación social de las políticas públicas.

Por su parte, Jürgen Habermas (1987) distingue entre racionalidad instrumental y racionalidad comunicativa. La primera se orienta al éxito y a la eficiencia técnica; la segunda, al entendimiento intersubjetivo mediante el diálogo. Aplicado a la gestión de residuos, ello

implica que no basta con optimizar procesos técnicos o introducir tecnologías más eficientes; es necesario construir consensos mediante deliberación y participación comunitaria.

Desde la perspectiva habermasiana, las decisiones ambientales legítimas deben surgir de procesos comunicativos inclusivos, donde los actores puedan argumentar en condiciones de relativa igualdad. En territorios rurales, esto supone fortalecer espacios de participación, juntas comunitarias y mecanismos deliberativos que permitan integrar saberes técnicos y experiencias locales en la formulación e implementación de políticas.

En síntesis, la gestión del conocimiento en contextos rurales no puede reducirse a la transferencia unidireccional de información técnica. Debe entenderse como un proceso dialógico y relacional que articula conocimiento tácito y explícito, ciencia y saber local, eficiencia técnica y legitimidad comunicativa. Solo así es posible construir modelos de gestión ambiental sostenibles, culturalmente pertinentes y socialmente legitimados.

Gobernanza colaborativa y bienes comunes

La gobernanza colaborativa permite comprender la coordinación entre actores públicos y sociales frente a problemas complejos que desbordan la capacidad del Estado tradicional. Renate Mayntz (2001) sostiene que la transición de “gobierno” a “gobernanza” implica pasar de estructuras jerárquicas verticales a sistemas de coordinación horizontal basados en redes. Para Mayntz, el Estado no desaparece, pero deja de ser el único centro de autoridad; y se convierte en un actor más dentro de entramados donde participan organizaciones sociales, empresas y comunidades. La gobernanza, en este sentido, supone negociación, interdependencia y construcción de reglas compartidas, especialmente en contextos donde los problemas públicos como la gestión ambiental, son multidimensionales.

En una línea complementaria, Jan Kooiman (2003) plantea que las sociedades contemporáneas se caracterizan por la complejidad, la diversidad y el dinamismo, lo que exige formas de “gobernanza interactiva”. Kooiman distingue entre tres órdenes de gobernanza: el primero, centrado en la resolución cotidiana de problemas; el segundo, orientado al diseño institucional; y el tercero, vinculado a los valores y principios que guían el sistema. Aplicado a la

gestión de residuos o a los bienes comunes ambientales, esto implica no solo coordinar actores para operar servicios, sino también reflexionar sobre las normas, los valores ecológicos y las metas colectivas que sustentan dichas prácticas.

En esta línea, Elinor Ostrom (1990) demostró empíricamente que los bienes comunes pueden gestionarse sosteniblemente sin necesidad de privatización ni control estatal centralizado, siempre que existan instituciones locales robustas. A partir de estudios comparados, Ostrom identificó principios de diseño para la gestión exitosa de recursos comunes: límites claramente definidos, reglas adaptadas a condiciones locales, mecanismos de monitoreo, sanciones graduales, resolución de conflictos accesible y reconocimiento del derecho a la autoorganización.

Los puntos comunitarios de acopio o los sistemas locales de reciclaje pueden analizarse bajo esta lógica: cuando la comunidad define reglas claras sobre uso, responsabilidades y vigilancia, se reducen comportamientos oportunistas y se fortalece la sostenibilidad del sistema. Sin embargo, Ostrom también advierte que estos arreglos requieren legitimidad y respaldo institucional externo cuando enfrentan presiones mayores, como mercados informales o falta de financiamiento.

Desde una perspectiva crítica, Claus Offe (2006) advierte que la descentralización puede convertirse en un mecanismo de transferencia de responsabilidades sin recursos suficientes. Offe señala que, en contextos de reformas neoliberales, el Estado puede delegar funciones a gobiernos locales o comunidades sin garantizar financiamiento, capacidades técnicas o marcos regulatorios adecuados. Esto genera una “descentralización asimétrica”, donde territorios con mayores recursos prosperan y aquellos con menor capacidad institucional profundizan sus brechas.

Por ello, la gobernanza colaborativa no debe idealizarse como solución automática; su éxito depende de condiciones estructurales que eviten la sobrecarga comunitaria y la reproducción de desigualdades territoriales.

En el ámbito de la coproducción de políticas públicas, Joan Subirats (2012) subraya que la participación ciudadana no solo mejora la eficiencia de las políticas, sino que fortalece su legitimidad democrática. Subirats entiende la coproducción como un proceso en el que ciudadanía y administración pública comparten diagnóstico, diseño e implementación de soluciones, superando la lógica asistencialista. Sin embargo, insiste en que la participación requiere estructuras formales que la canalicen y la hagan efectiva, evitando que se reduzca a consultas simbólicas.

De manera complementaria, Cristina Zurbriggen (2011) destaca que la gobernanza colaborativa en América Latina enfrenta desafíos específicos: debilidad institucional, fragmentación administrativa y desigualdades socioeconómicas. Zurbriggen plantea que la coproducción exige capacidades estatales sólidas para coordinar actores diversos, garantizar transparencia y sostener procesos participativos en el tiempo. Sin estas condiciones, la colaboración puede diluirse o convertirse en un mecanismo de legitimación sin incidencia real.

En síntesis, la gobernanza colaborativa y la gestión de bienes comunes ofrecen un marco potente para abordar problemáticas ambientales y territoriales. No obstante, su efectividad depende de reglas claras, capacidad institucional, recursos adecuados y procesos deliberativos inclusivos. Lejos de sustituir al Estado, estos enfoques redefinen su papel como articulador, garante y facilitador de redes interdependientes orientadas al bien común.

Gestión de residuos sólidos y enfoques ambientales contemporáneos

En América Latina, los estudios sobre gestión de residuos han evidenciado limitaciones estructurales persistentes en los sistemas municipales. Guillermo Acurio et al. (1998) identifican problemas como baja cobertura del servicio, disposición final inadecuada, debilidad financiera de los municipios y escasa planificación técnica. Su diagnóstico muestra que muchos gobiernos locales operan con infraestructura obsoleta, limitada capacidad administrativa y marcos regulatorios poco articulados. Además, subrayan que la informalidad en la recuperación de materiales no es una anomalía, sino una respuesta estructural a fallas del sistema formal, lo que exige enfoques integrales que combinen fortalecimiento institucional, educación ambiental y mecanismos de inclusión social.

En esta misma línea, Martín Medina (2007) documenta el papel estratégico de los recicladores en América Latina, Asia y África, destacando su contribución económica, ambiental y social. Medina demuestra que los recicladores no solo reducen costos municipales y tasas de disposición final, sino que constituyen redes organizativas complejas con capacidad de autogestión. Su trabajo evidencia que la inclusión formal de recicladores en políticas públicas — mediante cooperativas, contratos o esquemas de responsabilidad compartida — mejora la eficiencia del sistema y promueve justicia social. De este modo, la gestión inclusiva de residuos se convierte en un ejemplo concreto de gobernanza colaborativa y coproducción de bienes públicos.

Desde el plano teórico, Arthur P J Mol (2001) propone la teoría de la modernización ecológica, la cual sostiene que el desarrollo económico y la protección ambiental no son necesariamente contradictorios. Según Mol, la innovación tecnológica, la reforma institucional y la participación de actores privados pueden internalizar criterios ambientales en los procesos productivos. Esta perspectiva confía en la capacidad de los mercados regulados, la ciencia y las políticas públicas para impulsar una transición hacia patrones más sostenibles de producción y consumo. En el ámbito de residuos, ello se traduce en tecnologías limpias, sistemas de reciclaje tecnificado, economía circular y marcos regulatorios que incentiven eficiencia ambiental.

Sin embargo, esta visión dialoga —y a la vez tensiona— con la propuesta de Enrique Leff (2004) sobre racionalidad ambiental. Leff critica la idea de que la crisis ecológica pueda resolverse exclusivamente mediante ajustes tecnológicos o mecanismos de mercado. Para él, la problemática ambiental es también una crisis civilizatoria vinculada a la racionalidad económica dominante. La racionalidad ambiental implica una transformación cultural y epistemológica que reconozca la diversidad de saberes, la complejidad ecológica y la necesidad de reorientar los procesos productivos desde principios de sustentabilidad fuerte.

Mientras la modernización ecológica apuesta por la reforma interna del sistema moderno-industrial, la racionalidad ambiental propone una reconfiguración más profunda de las bases culturales y económicas del desarrollo. No obstante, ambas perspectivas pueden complementarse si se evita su aplicación dogmática.

En contextos rurales, esta articulación resulta especialmente pertinente. Por un lado, tecnologías apropiadas —como biodigestores, sistemas descentralizados de compostaje o infraestructura modular de reciclaje— pueden mejorar eficiencia y reducir impactos ambientales, en línea con la modernización ecológica. Por otro, estas innovaciones requieren procesos de apropiación social, diálogo de saberes y transformación cultural coherentes con la racionalidad ambiental de Leff.

En consecuencia, la sostenibilidad en territorios rurales no depende únicamente de introducir tecnología, sino de integrarla en marcos comunitarios que reconozcan saberes locales, promuevan equidad y fortalezcan capacidades institucionales. La convergencia entre innovación tecnológica e innovación cultural se convierte así en condición necesaria para superar las limitaciones estructurales históricas de la gestión de residuos en América Latina.

Enfoque epistemológico

El presente estudio se inscribe en un enfoque epistemológico de carácter interpretativo–crítico, que reconoce la realidad social y ambiental como una construcción compleja, situada y dinámica, producida a partir de la interacción entre actores, saberes y contextos específicos. Desde esta perspectiva, la gestión de residuos sólidos en las veredas del sur de Hispania no se concibe como un fenómeno exclusivamente técnico u objetivable de manera aislada, sino como un proceso social atravesado por relaciones de poder, marcos normativos, prácticas culturales y formas locales de conocimiento.

El enfoque interpretativo permite comprender los significados que las comunidades rurales atribuyen a sus prácticas cotidianas de manejo de residuos, así como las racionalidades que subyacen a dichas prácticas. Este posicionamiento epistemológico resulta fundamental para evitar lecturas simplificadas o normativas que atribuyen la problemática exclusivamente a la falta de información o a comportamientos individuales, y posibilita, en cambio, un análisis contextualizado de las decisiones y acciones colectivas en el territorio.

De manera complementaria, la dimensión crítica del enfoque epistemológico adoptado orienta el análisis hacia la identificación de las limitaciones estructurales del modelo institucional vigente y de las tensiones existentes entre los lineamientos de la política pública y las realidades locales. Este posicionamiento implica cuestionar los supuestos implícitos de los enfoques centralizados de gestión ambiental y problematizar la transferencia acrítica de modelos urbanos a contextos rurales, evidenciando sus efectos excluyentes y su baja sostenibilidad.

Asimismo, el estudio se apoya en principios propios de la epistemología del conocimiento situado, reconociendo que el saber producido por las comunidades rurales constituye una fuente legítima de conocimiento para la gestión ambiental. En este sentido, se asume que la generación de soluciones sostenibles para la gestión de residuos requiere la articulación entre conocimiento científico, normativo y empírico, superando la dicotomía entre experto y comunidad. Este posicionamiento epistemológico respalda la elección de enfoques como la innovación social, la gestión del conocimiento y la gobernanza colaborativa, al

considerarlos coherentes con una comprensión plural, participativa y transformadora de la realidad estudiada.

Marco contextual e institucional

La gestión integral de residuos sólidos en Colombia se encuentra enmarcada en un conjunto de disposiciones normativas y de política pública que buscan garantizar la protección ambiental, la salud pública y la prestación eficiente del servicio de aseo. No obstante, la aplicación de este marco en territorios rurales dispersos presenta desafíos significativos, particularmente en municipios de sexta categoría como Hispania, Antioquia, donde las capacidades institucionales y los recursos disponibles son limitados.

A nivel nacional, la Política para la Gestión Integral de Residuos Sólidos y los lineamientos asociados a los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) establecen principios orientados a la reducción en la fuente, el aprovechamiento, la disposición final adecuada y la inclusión de actores históricamente marginados, como los recicladores de oficio. Sin embargo, estos instrumentos han sido concebidos, en gran medida, desde una lógica urbana, lo que dificulta su implementación efectiva en contextos rurales caracterizados por baja densidad poblacional, dispersión geográfica y dinámicas productivas agropecuarias.

En el caso del municipio de Hispania, el PGIRS vigente reconoce la existencia de zonas rurales, pero no desarrolla estrategias diferenciadas que respondan a las particularidades de las veredas del sur del municipio. Esta ausencia de un enfoque territorializado se traduce en una cobertura limitada del servicio de recolección, una débil infraestructura para el aprovechamiento de residuos y una escasa articulación entre la administración municipal y las comunidades rurales. Como resultado, la gestión de residuos en estas veredas se apoya mayoritariamente en prácticas informales, con impactos negativos acumulativos sobre los ecosistemas locales y la calidad de vida de la población.

Desde el punto de vista institucional, la responsabilidad de la gestión de residuos recae en actores con competencias fragmentadas, lo que dificulta la coordinación interinstitucional y

la implementación de acciones sostenidas en el tiempo. La limitada capacidad técnica y financiera del municipio, sumada a la dependencia de recursos externos, condiciona el alcance de las intervenciones y refuerza la necesidad de explorar modelos alternativos de gestión basados en la corresponsabilidad y la participación comunitaria.

Perspectiva teórica y conceptual

El análisis de la gestión de residuos sólidos en las veredas del sur de Hispania se fundamenta en una perspectiva teórica que integra tres enfoques complementarios: la innovación social, la gestión del conocimiento y la gobernanza colaborativa. Esta articulación permite abordar la problemática desde una visión sistémica, superando los enfoques reduccionistas centrados exclusivamente en la dimensión técnica del manejo de residuos.

La innovación social se entiende como el proceso mediante el cual se generan nuevas formas de organización, interacción y acción colectiva para resolver problemas sociales y ambientales, produciendo valor social sostenible. En el contexto rural, la innovación social es relevante, ya que las soluciones más efectivas suelen emerger de la adaptación creativa de prácticas existentes y del fortalecimiento de las capacidades locales, más que de la simple transferencia de modelos externos.

Por su parte, la gestión del conocimiento se concibe como el conjunto de procesos destinados a identificar, crear, organizar, compartir y aplicar el conocimiento, tanto explícito como tácito, con el fin de mejorar la toma de decisiones y la acción colectiva. En territorios rurales, donde el conocimiento empírico acumulado por las comunidades constituye un activo estratégico, la gestión del conocimiento permite articular los saberes locales con el conocimiento técnico y científico, generando soluciones contextualizadas y culturalmente pertinentes.

La gobernanza colaborativa complementa estos enfoques al proponer un modelo de toma de decisiones basado en la participación de múltiples actores, incluyendo instituciones públicas, comunidades locales, organizaciones sociales y, eventualmente, el sector privado y la academia. Este enfoque resulta especialmente adecuado para la gestión ambiental rural, en la

medida en que reconoce la distribución del conocimiento y la necesidad de construir consensos para la implementación de soluciones sostenibles

Evaluación de la situación objeto de estudio

A partir del marco contextual y conceptual descrito, se procede a evaluar el estado actual de la gestión de residuos sólidos en las veredas del sur de Hispania, considerando tanto las prácticas comunitarias como la capacidad institucional para orientar y acompañar estos procesos. La evaluación evidencia una brecha significativa entre los lineamientos establecidos en los instrumentos de política pública y las prácticas reales de manejo de residuos en el territorio.

En términos operativos, se observa una limitada cobertura del servicio de recolección formal, lo que obliga a las comunidades a recurrir a alternativas informales para la disposición de los residuos. Estas prácticas, aunque funcionales desde una lógica de supervivencia, generan externalidades negativas que afectan la calidad del suelo, el agua y el aire. Asimismo, la ausencia de sistemas de separación en la fuente y de infraestructuras de aprovechamiento restringe las posibilidades de valorización de los residuos, especialmente de los orgánicos derivados de la actividad cafetera y agropecuaria.

Desde una perspectiva social, la evaluación pone de manifiesto una baja apropiación comunitaria de los lineamientos del PGIRS, asociada tanto a la falta de procesos sostenidos de educación ambiental como a la percepción de que la gestión de residuos es una responsabilidad exclusiva de la administración municipal. Esta situación se ve agravada por la invisibilización de los recicladores de oficio rurales, cuya labor no ha sido formalmente reconocida ni integrada en los esquemas locales de gestión de residuos.

En el plano institucional, la evaluación revela debilidades en los mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación de las acciones relacionadas con la gestión de residuos en el ámbito rural. La carencia de indicadores específicos y de sistemas de información actualizados limita la capacidad del municipio para tomar decisiones basadas en evidencia y para ajustar las estrategias en función de los resultados obtenidos.

Opciones de abordaje y criterios de evaluación

Frente a las limitaciones identificadas, la evaluación permite delinear un conjunto de opciones de abordaje orientadas al fortalecimiento de la gestión integral de residuos sólidos en las veredas del sur de Hispania. Estas opciones se fundamentan en la articulación de los enfoques de innovación social, gestión del conocimiento y gobernanza colaborativa, y buscan promover soluciones sostenibles y adaptadas al contexto rural.

Entre las alternativas identificadas se destacan el desarrollo de programas piloto de economía circular enfocados en el aprovechamiento de residuos orgánicos agrícolas, la formalización y fortalecimiento de organizaciones de recicladores de oficio rurales, y la creación de espacios comunitarios para el intercambio de conocimientos y la co-creación de soluciones. Estas iniciativas requieren el establecimiento de criterios de evaluación claros que permitan medir su impacto ambiental, social y económico.

Los criterios propuestos incluyen, entre otros, la reducción de prácticas de disposición inadecuada, el incremento en las tasas de aprovechamiento de residuos, el fortalecimiento de las capacidades organizativas de las comunidades y la mejora en la percepción comunitaria sobre la gestión de residuos. La adopción de estos criterios facilita una evaluación integral de las intervenciones y contribuye a la construcción de un modelo replicable en otros territorios rurales con características similares.

CAPÍTULO 3. ENFOQUE Y DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN

El presente capítulo expone de manera rigurosa el enfoque metodológico, el diseño de la investigación y los procedimientos empleados para el desarrollo del estudio, en coherencia con el problema planteado, los objetivos definidos y el enfoque epistemológico interpretativo–crítico adoptado. La metodología se concibe no como un conjunto de técnicas aisladas, sino como una estrategia integral orientada a comprender, evaluar e interpretar la gestión de residuos sólidos en las veredas del sur del municipio de Hispania desde una perspectiva contextualizada y situada.

Enfoque y diseño metodológico

Enfoque de la investigación

La investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, con alcance descriptivo–analítico, fundamentado específicamente en la investigación documental como estrategia metodológica central. Este tipo de investigación se orienta al análisis sistemático, crítico e interpretativo de fuentes secundarias, con el propósito de construir conocimiento a partir de documentos preexistentes tales como leyes, políticas públicas, informes técnicos, artículos científicos y planes institucionales.

Desde esta perspectiva, la investigación documental permite comprender fenómenos sociales complejos sin recurrir directamente al trabajo de campo, privilegiando el estudio profundo de los discursos, marcos normativos y producciones académicas relacionadas con el objeto de estudio. Tal como señalan Roberto Hernández Sampieri et al. (2014), el enfoque cualitativo busca interpretar la realidad desde los significados que emergen de los datos, más que medir variables cuantificables, lo cual resulta coherente con el análisis de la gestión integral de residuos sólidos en contextos rurales.

Asimismo, la investigación se inscribe en un posicionamiento epistemológico interpretativo–crítico, en tanto procura identificar tensiones, brechas y relaciones de poder presentes en los procesos institucionales y comunitarios asociados al manejo de residuos, superando una visión meramente técnica del problema. En concordancia con Uwe Flick (2015), este enfoque reconoce que el conocimiento social se construye a partir de la interpretación de textos y prácticas, lo cual justifica el uso de fuentes documentales como insumo principal para el análisis.

Tipo y diseño de investigación

El diseño metodológico corresponde a un estudio documental evaluativo, centrado en el análisis de la gestión de residuos sólidos en las veredas del sur del municipio de Hispania, Antioquia, a partir de fuentes normativas, institucionales y académicas. Este diseño permitió examinar la coherencia entre los lineamientos del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), la normatividad vigente y las condiciones del territorio rural, sin recurrir a instrumentos de recolección directa de información primaria.

La investigación documental evaluativa se caracteriza por contrastar lo establecido en los documentos oficiales con los enfoques teóricos contemporáneos y las experiencias sistematizadas en estudios previos, con el fin de identificar vacíos, limitaciones y oportunidades de mejora. Según Julio César Bernal (2010), este tipo de investigación permite generar análisis críticos que orientan la toma de decisiones y la formulación de propuestas, especialmente en el ámbito de las políticas públicas.

Desde esta lógica, el estudio no se orientó a la comprobación de hipótesis, sino a la comprensión integral del fenómeno, priorizando el análisis contextualizado de los documentos como expresión de dinámicas institucionales y sociales.

Fuentes de información y criterios de selección documental

Las fuentes de información utilizadas fueron exclusivamente secundarias y comprendieron la normatividad nacional y regional relacionada con la gestión de residuos sólidos, los documentos institucionales del municipio (PGIRS, planes de desarrollo, informes técnicos) y los artículos científicos y tesis académicas sobre residuos sólidos en contextos rurales y los informes de organismos públicos y entidades ambientales.

La selección documental se realizó mediante un muestreo intencional, atendiendo criterios de pertinencia temática, actualidad, confiabilidad institucional y relevancia analítica. Este procedimiento permitió conformar un corpus documental coherente con los objetivos del estudio, garantizando la calidad y validez de la información analizada.

De acuerdo con Mario Tamayo y Tamayo (2012), la investigación documental exige una revisión crítica de las fuentes, evitando su uso meramente descriptivo y promoviendo la interpretación reflexiva del contenido.

Técnicas e instrumentos

La técnica principal fue el análisis documental, entendido como un proceso sistemático de revisión, clasificación, comparación e interpretación de textos. Para su desarrollo se emplearon matrices de análisis que permitieron organizar la información según categorías temáticas previamente definidas.

Estas matrices incluyeron variables como el tipo de documento, año de publicación, enfoque conceptual, aportes principales y relación con la gestión rural de residuos sólidos. Este procedimiento facilitó la triangulación teórica entre distintas fuentes y fortaleció la consistencia analítica del estudio.

El análisis se realizó en los siguientes tres niveles:

1. Exploratorio, orientado a identificar documentos relevantes.
2. Analítico, centrado en la extracción de ideas clave.

3. Interpretativo, dirigido a establecer relaciones conceptuales y generar reflexiones críticas.

Este proceso coincide con lo planteado por Uwe Flick (2015), quien destaca que el análisis cualitativo de documentos permite reconstruir significados sociales y comprender estructuras institucionales implícitas.

Fases del proceso investigativo

El desarrollo metodológico se organizó en cuatro fases las cuales son:

la fase 1. que consta de Planeación y delimitación del objeto de estudio.

Incluyó la formulación del problema, la definición de objetivos y la construcción del marco teórico.

La fase 2. La recolección documental.

Se realizó la búsqueda sistemática de fuentes en repositorios académicos, portales institucionales y bases normativas.

Como ejemplo concreto de esta fase, se realizó la consulta de la normatividad ambiental colombiana vigente relacionada con residuos sólidos, el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del municipio de Hispania, los planes de desarrollo municipal y documentos técnicos de entidades ambientales, los artículos científicos publicados en repositorios académicos (Scielo, Google Scholar y Redalyc) y las tesis de grado y trabajos de investigación enfocados en gestión de residuos sólidos rurales.

Cada documento fue evaluado según criterios de pertinencia temática, actualidad, confiabilidad institucional y aporte conceptual, descartando aquellos que presentaban información redundante o escasa relación con los objetivos del estudio.

Este procedimiento responde a lo planteado por Roberto Hernández Sampieri et al. (2014), quienes señalan que en la investigación cualitativa documental la selección de fuentes debe realizarse de manera intencional y razonada, priorizando la calidad del contenido sobre la cantidad de documentos.

Como resultado de esta fase, se consolidó un corpus documental organizado cronológica y temáticamente, que constituyó la base empírica del análisis posterior.

La fase 3. Organización y sistematización.

Los documentos se clasificaron con matrices temáticas, en cada sección se dio una breve interpretación, lo que ayudó a reconocer patrones comunes, huecos conceptuales y diferencias entre los documentos.

Este procedimiento coincide con lo expuesto por Uwe Flick (2015), quien destaca que la sistematización documental debe permitir pasar del texto original a unidades de significado, favoreciendo un análisis relacional y no meramente descriptivo.

La fase 4. El análisis e interpretación.

Se desarrolló el análisis cualitativo, articulando los hallazgos con los referentes teóricos y normativos, lo cual permitió construir los resultados del estudio.

Categorización y clasificación de la información

El análisis se efectuó mediante categorización temática, combinando un enfoque deductivo derivado del marco teórico y uno inductivo emergente del contenido documental.

Las categorías iniciales incluyeron, la gestión institucional de residuos sólidos, el enfoque rural del PGIRS, la participación comunitaria, el aprovechamiento y valorización de residuos y la articulación entre saberes locales y conocimiento técnico.

Estas categorías fueron ajustadas progresivamente durante el análisis, permitiendo una comprensión más profunda del fenómeno estudiado.

La categorización constituyó la base para la construcción del capítulo de resultados, facilitando una lectura crítica de las políticas públicas y evidenciando las principales brechas entre el diseño normativo y las realidades rurales.

CAPÍTULO 4. RESULTADOS

El presente capítulo expone los resultados derivados del proceso sistemático de análisis documental, categorización temática e interpretación crítica del corpus conformado por instrumentos normativos, documentos institucionales del municipio, literatura académica especializada y experiencias sistematizadas sobre gestión de residuos sólidos en contextos rurales.

El análisis se desarrolló mediante matrices documentales y unidades de significado, organizadas en cinco categorías principales: gestión institucional, prácticas comunitarias, aprovechamiento de residuos, participación y gobernanza, y gestión del conocimiento e innovación social. Estas categorías fueron definidas inicialmente de manera deductiva desde el marco teórico y posteriormente refinadas de forma inductiva, a partir de hallazgos emergentes del material revisado, en coherencia con el enfoque cualitativo interpretativo–crítico propuesto por Uwe Flick (2015).

Este procedimiento permitió vincular los resultados con los objetivos del estudio y con la perspectiva metodológica documental, garantizando que cada hallazgo se sustentara directamente en evidencias textuales provenientes de los documentos analizados.

Gestión institucional de los residuos sólidos en el ámbito rural

El análisis del PGIRS municipal, contrastado con planes de desarrollo y lineamientos nacionales, evidenció una centralización estructural de la gestión de residuos en el área urbana, situación registrada reiteradamente en la matriz bajo la subcategoría emergente *brecha institucional–territorial*.

Aunque el PGIRS reconoce formalmente la existencia del sector rural, la revisión detallada del componente operativo muestra que las acciones específicas para veredas se limitan principalmente a la prestación básica del servicio de recolección, sin contemplar estrategias diferenciadas de acompañamiento comunitario, educación ambiental permanente o fortalecimiento organizativo. Este hallazgo se fundamenta en la comparación directa entre los apartados normativos del PGIRS y la ausencia de programas rurales específicos en los planes de acción.

Asimismo, los documentos institucionales revisados priorizan el cumplimiento regulatorio y los indicadores de cobertura, mientras relegan dimensiones sociales y culturales de la gestión. Esta lógica fue clasificada dentro de la categoría *enfoque técnico–administrativo predominante*, evidenciando una desconexión entre planificación y realidad territorial.

Tal situación coincide con lo señalado por Roberto Hernández Sampieri et al. (2014), quienes advierten que los estudios cualitativos permiten identificar contradicciones entre el diseño institucional y los contextos sociales cuando se analizan los documentos como expresiones de prácticas organizacionales.

Adicionalmente, se identificaron debilidades en la articulación interinstitucional: los documentos ambientales no dialogan de manera efectiva con las políticas de desarrollo rural, lo cual fue registrado como *fragmentación de políticas públicas*. Esta ausencia de integración limita la posibilidad de implementar enfoques territoriales y sostenibles.

Prácticas comunitarias de manejo de residuos

Desde la revisión de investigaciones previas sobre ruralidad y residuos sólidos, así como informes técnicos regionales, se identificó que las prácticas comunitarias responden principalmente a condiciones estructurales de acceso al servicio público. Esta evidencia fue agrupada bajo la categoría *estrategias informales de disposición*.

Los documentos analizados describen prácticas recurrentes como quema, enterramiento y disposición en espacios abiertos, las cuales emergen como respuestas funcionales ante la baja frecuencia de recolección rural. Estas dinámicas fueron registradas en la matriz como *racionalidades prácticas territoriales*, subrayando que no se trata únicamente de comportamientos individuales, sino de soluciones colectivas frente a vacíos institucionales.

Asimismo, la literatura revisada muestra que la separación en la fuente es mínima en zonas rurales y que el conocimiento ambiental es fragmentado, hallazgo coherente con estudios académicos incluidos en el corpus. Sin embargo, también se identificaron referencias a experiencias comunitarias exitosas en otros municipios, lo que permitió construir la subcategoría *disposición favorable al cambio condicionado*, evidenciando que la transformación de prácticas depende de la pertinencia cultural de las estrategias propuestas.

Aprovechamiento y valorización de residuos

El análisis documental permitió establecer que el aprovechamiento de residuos constituye uno de los componentes más débiles del modelo actual. Aunque los documentos institucionales reconocen el alto volumen de residuos orgánicos derivados de la caficultura y otras actividades agropecuarias, no se identifican programas estructurados de compostaje o economía circular en el ámbito rural.

Este hallazgo fue categorizado como *potencial productivo no activado*. La revisión de experiencias nacionales e internacionales mostró que el compostaje rural puede convertirse en

un eje de sostenibilidad local; sin embargo, en Hispania este enfoque permanece ausente del diseño operativo del PGIRS.

De manera complementaria, los documentos analizados evidencian una escasa articulación entre generadores rurales y recicladores de oficio, lo cual fue registrado bajo la subcategoría *desconexión de la cadena de aprovechamiento*. Esta situación refuerza la informalidad del reciclaje y limita la recuperación de materiales.

Participación comunitaria y gobernanza

En la categoría participación y gobernanza, el análisis reveló que los instrumentos institucionales mencionan la participación comunitaria de forma declarativa, pero no establecen mecanismos concretos de incidencia en la toma de decisiones. Este contraste fue sistematizado como *participación formal sin incidencia real*.

Los documentos revisados describen relaciones verticales entre administración municipal y comunidades rurales, donde estas últimas asumen un rol pasivo. Esta dinámica reduce la corresponsabilidad y debilita los procesos de apropiación social de la gestión ambiental.

No obstante, a partir del análisis comparativo con estudios de gobernanza rural, se identificó un alto potencial para modelos colaborativos basados en liderazgo comunitario y articulación con recicladores, categoría denominada *gobernanza emergente*. Este hallazgo señala oportunidades claras para transformar la gestión de residuos desde enfoques participativos.

Gestión del conocimiento e innovación social

Finalmente, la categoría gestión del conocimiento evidenció una brecha persistente entre saber técnico institucional y conocimientos locales. Aunque los documentos reconocen la importancia de la educación ambiental, no se identifican estrategias de sistematización de saberes rurales ni espacios de intercambio horizontal.

Este resultado fue clasificado como *desarticulación de saberes*, mostrando que las experiencias empíricas de las comunidades no han sido integradas a los procesos oficiales de planificación.

Desde la perspectiva de la innovación social, el análisis permitió identificar que la gestión de residuos posee un alto potencial como eje articulador de transformación territorial, siempre que se promuevan procesos de co-creación, fortalecimiento de capacidades locales y aprendizaje colectivo. Esta conclusión emerge directamente del contraste entre modelos tradicionales de gestión y experiencias documentadas de innovación comunitaria.

Este hallazgo constituye uno de los principales aportes del estudio, al evidenciar —desde fuentes documentales— que el problema de los residuos sólidos trasciende lo técnico y puede convertirse en un catalizador de desarrollo rural sostenible.

Tabla 1 correspondencia entre objetivos específicos, resultados y análisis interpretativo

Objetivo específico	Resultados principales	Interpretación y análisis
Conceptualizar la gestión de residuos sólidos en el marco de la innovación social y la gestión del conocimiento.	El análisis documental evidenció que el PGIRS municipal mantiene un enfoque técnico–administrativo, con escasa integración de dimensiones sociales, culturales y de aprendizaje colectivo.	Este resultado muestra una brecha entre los enfoques contemporáneos de innovación social y el modelo institucional vigente. La gestión de residuos continúa siendo un problema operativo, desconociendo su potencial como proceso de transformación territorial. La ausencia de gestión del conocimiento limita la apropiación comunitaria y restringe la generación de soluciones contextualizadas.
Analizar el contexto institucional, normativo y territorial de la gestión de residuos en las	Se identificó una centralización de la planificación en el área urbana, baja articulación interinstitucional y falta de estrategias diferenciadas para el sector rural.	Más que una debilidad puntual, este hallazgo evidencia un patrón estructural de desigualdad territorial. La normativa existe, pero su diseño urbano impide una implementación efectiva en contextos rurales dispersos, reproduciendo brechas en el acceso a servicios ambientales.

veredas del sur de Hispania.		
Identificar experiencias y enfoques de innovación social y gestión del conocimiento aplicables a contextos rurales.	La revisión de literatura muestra experiencias exitosas de compostaje comunitario, reciclaje inclusivo y gobernanza colaborativa en otros territorios, inexistentes en el caso local.	La relevancia del resultado no está solo en la ausencia de estas experiencias en Hispania, sino en demostrar que existen modelos replicables. Esto evidencia oportunidades concretas para introducir procesos de innovación social territorial mediante aprendizaje colectivo y co-creación.
Proponer oportunidades para el municipio de Hispania.	Se identificaron oportunidades en aprovechamiento de residuos orgánicos, fortalecimiento de recicladores, creación de espacios participativos y gestión del conocimiento.	Estas oportunidades emergen directamente del contraste entre el modelo actual y las experiencias documentadas. Su análisis permite pasar del diagnóstico a la formulación de alternativas viables, integrando dimensiones ambientales, sociales y económicas.

Tabla 2 correspondencia entre categorías de resultados y objetivo general

Categoría de análisis	Hallazgos clave	Relación con el objetivo general
Gestión institucional	Brecha entre PGIRS y realidad rural; enfoque urbano predominante.	Evidencia las brechas estructurales que justifican la necesidad de fortalecer la gestión desde enfoques territoriales.
Prácticas comunitarias	Manejo informal como respuesta adaptativa a ausencia institucional.	Permite comprender las racionalidades locales y orientar alternativas basadas en innovación social.
Aprovechamiento de residuos	Alto potencial orgánico sin activar.	Señala oportunidades concretas para economía circular rural y desarrollo sostenible.
Participación y gobernanza	Participación formal sin incidencia real.	Refuerza la necesidad de esquemas de gobernanza colaborativa.
Gestión del conocimiento	Desarticulación entre saber técnico y saber local.	Fundamenta la propuesta de fortalecer procesos de aprendizaje colectivo como eje transformador.

Discusión analítica de los resultados en relación con los objetivos del estudio

El propósito del presente apartado es profundizar en la interpretación de los hallazgos expuestos previamente, articulándolos con los objetivos de la investigación y con los antecedentes teóricos y contextuales revisados. Más allá de la descripción empírica, el análisis busca evidenciar que la problemática identificada no es meramente operativa, sino estructural, y que su transformación requiere intervenciones multinivel.

Brecha institucional–territorial y reproducción de modelos urbanos

En relación con el objetivo general —identificar brechas, oportunidades y alternativas de fortalecimiento de la gestión integral de residuos sólidos desde un enfoque de innovación social y gestión del conocimiento— los resultados evidencian una brecha persistente entre el diseño normativo del PGIRS y las realidades rurales.

Este hallazgo se encuentra en coherencia con lo documentado por David C Wilson et al. (2012), quienes, en su marco conceptual para la gestión integrada de residuos sólidos en países en desarrollo, advierten que muchos sistemas adoptan esquemas técnicos estandarizados sin considerar contextos socioeconómicos locales, lo que genera déficits de inclusión y sostenibilidad. De manera complementaria, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2016) ha señalado que la planificación ambiental en América Latina tiende a reproducir modelos urbanos centralizados que no responden a dinámicas rurales dispersas, profundizando desigualdades territoriales.

La relevancia de este resultado radica en demostrar que la brecha identificada no constituye una falla administrativa aislada, sino la expresión de una lógica estructural de diseño de política pública. En este sentido, la gestión de residuos se inserta en dinámicas más amplias de desigualdad territorial, lo que refuerza la necesidad de enfoques diferenciados.

Orientación técnico-administrativa y ausencia de integración socio ecológica

Respecto al objetivo específico de analizar el contexto institucional y normativo, los documentos revisados muestran una orientación técnico–administrativa centrada en cobertura y cumplimiento regulatorio. Sin embargo, esta lógica limita la incorporación de dimensiones sociales.

Esta interpretación encuentra respaldo en los planteamientos de Fikret Berkes (2008), quien sostiene que la sostenibilidad ambiental depende de la integración entre conocimiento institucional y saber ecológico tradicional. Berkes argumenta que los sistemas socioecológicos son adaptativos y requieren gobernanza flexible, aprendizaje continuo y participación de las comunidades locales.

La desconexión identificada en el caso estudiado evidencia precisamente la ausencia de este enfoque socio ecológico integrado, donde el conocimiento local no es incorporado de manera sistemática en la planificación institucional.

Prácticas comunitarias como respuestas adaptativas

El análisis de las prácticas de quema, enterramiento y vertimiento revela que estas no constituyen comportamientos irracionales, sino respuestas adaptativas ante restricciones estructurales. Este hallazgo desmonta explicaciones reduccionistas basadas en la “falta de conciencia ambiental”.

La literatura sobre aprendizaje social respalda esta interpretación. Jules Pretty (2003) sostiene que los cambios de comportamiento ambiental emergen cuando existen condiciones institucionales y materiales que los hacen viables, y no únicamente mediante campañas informativas. Asimismo, Berkes (2008) subraya que las comunidades desarrollan prácticas adaptativas coherentes con su contexto ecológico y económico.

En consecuencia, el problema no puede atribuirse exclusivamente a variables culturales, sino a limitaciones estructurales de acceso a servicios y acompañamiento técnico.

Potencial productivo de los residuos orgánicos y economía circular rural

En cuanto al aprovechamiento de residuos orgánicos, los resultados muestran un potencial productivo no activado. Esta situación implica no solo impactos ambientales negativos, sino oportunidades económicas desaprovechadas.

La Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO, 2013) ha destacado el papel del compostaje y la valorización de residuos orgánicos en sistemas agrícolas sostenibles, especialmente en economías rurales. Por su parte, Martin Medina (2007) documenta cómo la inclusión de recicladores y el aprovechamiento de residuos fortalecen tanto indicadores ambientales como ingresos locales.

Desde esta perspectiva, el residuo se resignifica como recurso estratégico dentro de una lógica de economía circular territorializada.

Participación formal y gobernanza limitada

Los resultados evidencian una participación formal sin incidencia real, caracterizada por relaciones verticales entre administración y comunidad. Este hallazgo limita la corresponsabilidad.

Los planteamientos de Elinor Ostrom (1990) demuestran que la gestión sostenible de bienes comunes requiere reglas construidas colectivamente, monitoreo social y legitimidad local. Sin estos elementos, la gobernanza se reduce a formalismo institucional.

De manera complementaria, Frank Moulaert (2013) sostiene que la innovación social territorial implica redistribución de poder y construcción de capacidades locales. En el caso analizado, si bien existen espacios formales de participación, estos no alcanzan el nivel de coproducción efectiva.

Desarticulación entre saber técnico y conocimiento local

En la categoría de gestión del conocimiento, se identificó una desarticulación entre saber técnico y conocimiento local. Este hallazgo adquiere relevancia a la luz del modelo de creación de conocimiento organizacional de Ikujiro Nonaka y Hirotaka Takeuchi (1995), quienes plantean que la innovación emerge cuando el conocimiento tácito se socializa, externaliza y combina con conocimiento explícito.

La ausencia de espacios de intercambio horizontal impide que este proceso ocurra. En consecuencia, el sistema institucional pierde oportunidades de aprendizaje colectivo y adaptación contextual.

Síntesis interpretativa

La discusión permite afirmar que la gestión de residuos sólidos en las veredas del sur de Hispania constituye un sistema socio ecológico caracterizado por una brecha estructural entre diseño normativo y realidad territorial, predominio de racionalidad técnico-administrativa, prácticas comunitarias adaptativas condicionadas por restricciones estructurales, potencial económico no activado en residuos orgánicos, participación formal con limitada coproducción y una débil articulación entre conocimiento técnico y saber local.

El aporte central del estudio no se limita a describir problemáticas, sino que evidencia que su transformación requiere puntos importantes como la territorialización efectiva de la política pública, la innovación social con respaldo institucional, la integración socio ecológica del conocimiento y la gobernanza colaborativa con incidencia real.

Tabla 3 Síntesis integradora: de los hallazgos a las alternativas

Hallazgo	Explicación del hallazgo	Alternativa propuesta
Centralización del PGIRS	El modelo urbano no responde a la dispersión rural.	Diseño de estrategias rurales diferenciadas.
Manejo informal de residuos	Resultado de baja cobertura del servicio.	Compostaje comunitario y puntos locales de acopio.
Invisibilización de recicladores	Falta de integración institucional.	Inclusión en esquemas locales de aprovechamiento.
Débil gestión del conocimiento	Ausencia de sistematización de saberes.	Espacios comunitarios de aprendizaje y co-creación.
Gobernanza vertical	Baja apropiación social.	Mesas rurales de gobernanza colaborativa.

CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El presente capítulo sintetiza los principales hallazgos de la investigación y formula conclusiones y recomendaciones derivadas del análisis desarrollado a lo largo del estudio. Las conclusiones se estructuran en coherencia con los objetivos planteados y el enfoque epistemológico interpretativo–crítico, mientras que las recomendaciones se orientan a fortalecer la gestión integral de residuos sólidos en las veredas del sur del municipio de Hispania desde una perspectiva sostenible y territorialmente pertinente.

Conclusiones

La presente investigación permitió evidenciar que la gestión integral de residuos sólidos en las veredas del sur del municipio de Hispania se encuentra atravesada por limitaciones estructurales de carácter institucional, territorial y socioeconómico, derivadas principalmente de la aplicación de un modelo de gestión concebido desde lógicas urbanas que no responde adecuadamente a las dinámicas propias del contexto rural.

Se concluye que la brecha existente entre los lineamientos normativos del PGIRS y las prácticas reales de manejo de residuos no obedece exclusivamente a déficits de educación ambiental o comportamientos individuales, sino que constituye una expresión de desigualdades territoriales históricas, baja capacidad institucional local y ausencia de enfoques diferenciados para zonas rurales dispersas, tal como lo señalan Wilson et al. y la CEPAL. Esta situación reproduce esquemas de exclusión ambiental y limita el acceso equitativo a servicios públicos esenciales.

Desde la perspectiva comunitaria, las prácticas informales de disposición de residuos identificadas quema, enterramiento y vertimiento, emergen como estrategias adaptativas frente a la insuficiente prestación del servicio de aseo, lo cual confirma que las comunidades no actúan desde la indiferencia ambiental, sino desde racionalidades prácticas condicionadas por restricciones estructurales. Este hallazgo refuerza lo planteado por Fikret Berkes (2008) respecto al carácter situado del conocimiento local y la necesidad de comprender las prácticas ambientales dentro de sus contextos socioculturales.

Asimismo, el estudio evidencia que el alto volumen de residuos orgánicos generados por la actividad agropecuaria representa un potencial significativo para el desarrollo de esquemas locales de economía circular. Sin embargo, esta oportunidad permanece desaprovechada debido a la ausencia de programas técnicos sostenidos y a la falta de articulación entre productores rurales, recicladores de oficio y administración municipal, lo cual coincide con lo señalado por la FAO y Medina (2013) sobre el valor estratégico del aprovechamiento inclusivo de residuos.

En relación con la gobernanza, se concluye que la gestión de residuos en el territorio está mediada por relaciones verticales que restringen la participación efectiva de las comunidades en la toma de decisiones. Esta dinámica limita la apropiación social de las políticas públicas y debilita la sostenibilidad de las intervenciones. No obstante, el análisis también permite identificar un potencial latente para el desarrollo de esquemas de gobernanza colaborativa, basados en la articulación entre actores comunitarios, recicladores de oficio y

entidades públicas, que podrían fortalecer la corresponsabilidad y la gestión comunitaria de los residuos como bien común ambiental.

Finalmente, uno de los principales aportes del estudio radica en la identificación de la gestión del conocimiento y la innovación social como ejes estratégicos para transformar la gestión de residuos sólidos en contextos rurales. La falta de articulación entre conocimiento técnico–institucional y saberes locales representa una barrera importante, pero al mismo tiempo abre oportunidades para la construcción de soluciones contextualizadas mediante procesos de co-creación y aprendizaje colectivo, tal como lo proponen Moulaert (2013) y Nonaka y Takeuchi (1995). En este sentido, la gestión de residuos puede convertirse en un catalizador de desarrollo rural sostenible, siempre que se aborde desde enfoques participativos, territorializados e intersectoriales.

Partiendo de estos hallazgos, la investigación no solo permite comprender el estado actual de la gestión de residuos sólidos en las veredas del sur del municipio de Hispania, sino que abre nuevas posibilidades de indagación orientadas a profundizar en dimensiones aún poco exploradas del fenómeno. En primer lugar, surge la necesidad de formular preguntas relacionadas con los procesos de apropiación comunitaria y cambio cultural, tales como: ¿cómo influyen las dinámicas organizativas locales en la sostenibilidad de las iniciativas de gestión de residuos rurales?, y ¿qué factores socioculturales facilitan o limitan la adopción de prácticas de separación y aprovechamiento en contextos campesinos? Estas interrogantes se articulan con los planteamientos de Berkes(2008) y Pretty (2003) quienes destacan que la efectividad de las intervenciones ambientales depende del aprendizaje social y de la participación de las comunidades.

Asimismo, resulta pertinente profundizar en el papel de la gobernanza colaborativa en territorios rurales de pequeña escala, mediante preguntas como: ¿qué condiciones institucionales favorecen la consolidación de arreglos colaborativos estables entre comunidades, recicladores de oficio y gobiernos locales?, y ¿cómo pueden traducirse las experiencias piloto de innovación social en políticas públicas permanentes?, en coherencia con

los aportes de Ostrom (1996) y Moulaert et al. (2013) sobre la coproducción de soluciones y la transformación territorial.

Otro aspecto relevante para futuras investigaciones se relaciona con el aprovechamiento productivo de los residuos orgánicos, a través de interrogantes como: ¿cuál es el impacto económico real del compostaje comunitario en los sistemas productivos rurales?, y ¿de qué manera el aprovechamiento de residuos puede contribuir a la soberanía alimentaria y a la reducción de la dependencia de insumos externos?, retomando las reflexiones de la Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO, 2013, 2018) y de Martín Medina (2007) sobre el potencial de la economía circular rural.

Desde la perspectiva de la gestión del conocimiento, emerge la necesidad de profundizar en preguntas como: ¿cómo pueden sistematizarse y escalarse los saberes locales dentro de los procesos institucionales de planificación ambiental?, y ¿qué metodologías participativas resultan más efectivas para articular conocimiento técnico y conocimiento empírico?, en línea con los planteamientos de Ikujiro Nonaka y Hirotaka Takeuchi (1995) sobre creación organizacional del conocimiento, así como con la perspectiva socioecológica de Fikret Berkes (2008) respecto a la integración entre saber tradicional y gobernanza adaptativa.

Finalmente, se identifica como línea futura de investigación el análisis comparativo entre municipios rurales con características similares, que permita reconocer patrones, buenas prácticas y modelos replicables de gestión de residuos sólidos basados en innovación social y gobernanza colaborativa, contribuyendo así al fortalecimiento de políticas públicas rurales más contextualizadas, tal como lo recomienda la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2016).

En conjunto, estas reflexiones finales confirman que la gestión de residuos sólidos en contextos rurales constituye un campo fértil para la investigación interdisciplinaria, en el que convergen dimensiones ambientales, sociales, económicas e institucionales, y donde la innovación social puede consolidarse como un eje estratégico para el desarrollo territorial sostenible.

Recomendaciones

Incorporar formalmente un enfoque rural diferencial en el PGIRS, superando la replicación del modelo urbano y diseñando estrategias específicas para territorios dispersos, en coherencia con lo planteado por la CEPAL (2016) y por Guerrero, Maas y Hogland (2013) en sus estudios sobre gestión de residuos en países en desarrollo.

Establecer mesas permanentes de gobernanza colaborativa que integren administración municipal, comunidades rurales y recicladores de oficio, promoviendo procesos de coproducción de políticas públicas, tal como sugieren Elinor Ostrom (1996) y Chris Ansell y Alison Gash (2008) en su modelo de gobernanza colaborativa.

Implementar programas piloto de aprovechamiento de residuos orgánicos mediante compostaje comunitario, articulados con la producción cafetera, siguiendo las recomendaciones de la FAO (2013) y de Zurbrügg et al. (2012) sobre gestión descentralizada de residuos orgánicos, con acompañamiento técnico sostenido.

Fortalecer el reconocimiento e inclusión de los recicladores rurales dentro del sistema local de gestión de residuos, retomando los aportes de Medina (2007) y de Dias (2016) sobre reciclaje inclusivo como estrategia ambiental y social.

Desarrollar procesos sistemáticos de gestión del conocimiento, que incluyan documentación de experiencias locales, intercambios Inter veredales y construcción de memorias comunitarias, en consonancia con Nonaka y Takeuchi (1995) y Berkes (2008).

Diseñar estrategias de educación ambiental participativa basadas en aprendizaje colectivo y saberes locales, superando enfoques verticales, tal como proponen Jules Pretty (2003) y Berkes (2008).

Integrar indicadores sociales y territoriales en el seguimiento del PGIRS, incluyendo participación comunitaria, apropiación local y fortalecimiento organizativo, complementando los indicadores técnicos tradicionales.

Promover alianzas con universidades regionales para apoyar procesos de investigación–acción participativa, favoreciendo la innovación social territorial, como plantean Frank Moulaert et al. (2013).

Garantizar que las iniciativas comunitarias exitosas sean incorporadas formalmente en los planes de desarrollo municipal, evitando su aislamiento como experiencias piloto, tal como advierten Montoya y Gómez (2018) en estudios sobre institucionalización de innovaciones locales en Colombia.

Impulsar futuras investigaciones comparativas entre municipios rurales similares, con el fin de generar modelos replicables de gestión de residuos basados en innovación social y gobernanza colaborativa.

Referencias

Acurio, G., Rossin, A., Teixeira, P., & Zepeda, F. (1998). *Diagnóstico de la situación del manejo de residuos sólidos municipales en América Latina y el Caribe*. Banco Interamericano de Desarrollo.

Banco Mundial. (2018). *What a waste 2.0: A global snapshot of solid waste management to 2050*. World Bank.

Berkes, F. (2012). *Sacred ecology* (3rd ed.). Routledge.

Bernache-Pérez, G., De Medina-Salas, L., Castillo-González, E., & Giraldi-Díaz, M. R. (2023). Strategies to strengthen integrated solid waste management in small municipalities. *Sustainability*, 15(5), 4318.

CEPAL. (2020). *Economía circular en América Latina y el Caribe*. Naciones Unidas.

Gómez-Maldonado, A., Ospina-Espita, L. C., Rodríguez-Lesmes, P. & Rodríguez-Rodríguez, M. A. (2023). *Barriers and opportunities for waste pickers within solid waste management policy in Colombia*. *Waste Management*, 163, 1-11.

Habermas, J. (1987). *Teoría de la acción comunicativa*. Taurus.

Hernández-Berriel, M. del C., Aguilar-Virgen, Q., Taboada-González, P., Lima-Morra, R., Eljaiek-Urzola, M., Márquez-Benavides, L., & Buenrostro-Delgado, O. (2016). *Generación y composición de los residuos sólidos urbanos en América Latina y el Caribe*. Revista Internacional de Contaminación Ambiental, 32, 11–22.

Kooiman, J. (2003). *Governing as governance*. Sage.

Leff, E. (2004). *Racionalidad ambiental: La reapropiación social de la naturaleza*. Siglo XXI Editores.

Leff, E. (2014). *La apuesta por la vida*. Siglo XXI Editores.

Medina, M. (2007). *The world's scavengers: Salvaging for sustainable consumption and production*. AltaMira Press.

Mol, A. P. J. (2001). *Globalization and environmental reform: The ecological modernization of the global economy*. MIT Press.

Moulaert, F., MacCallum, D., Mehmood, A., & Hamdouch, A. (2013). *The international handbook on social innovation*. Edward Elgar.

Mulgan, G., Caulier-Grice, J., & Murray, R. (2010). *The open book of social innovation*. The Young Foundation.

Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). *The knowledge-creating company*. Oxford University Press.

Ndiege, J. R. A. (2023). *Knowledge management in local governments in developing contexts: Barriers and enablers*. VJIKMS. (Revisión académica sobre procesos de KM).

Torres Hernández, A. M. (2025). *Fortalecimiento institucional y desarrollo local: revisión y perspectivas de las políticas públicas en municipios de quinta y sexta categoría en Colombia*. *European Public & Social Innovation Review*, 10, 1-19.

OCDE. (2020). *The circular economy in cities and regions*. OECD Publishing.

Offe, C. (2006). *Governance: An “empty signifier”?* Constellations, 13(4), 550–562.

Ostrom, E. (1990). *Governing the commons*. Cambridge University Press.

Polanyi, M. (1966). *The tacit dimension*. Doubleday.

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. (2015). *Global waste management outlook*. United Nations Environment Programme.

Subirats, J. (2012). *Otra sociedad, ¿otra política?* Icaria Editorial.

Schumacher, E. F. (1973). *Small is beautiful: Economics as if people mattered*. Blond & Briggs.

Según Alves, Villar y Mato (2024), las estrategias de compostaje comunitario pueden ofrecer alternativas viables de gestión de biorresiduos municipales y fomentar la participación ciudadana en el manejo de residuos orgánicos.

Zurbriggen, C. (2011). Gobernanza y políticas públicas en América Latina. *Revista del CLAD Reforma y Democracia*, (50), 1–22.